1627-1

■ **Desafuero de Pinochet**

Cautela Concertada

El Disfrazado Júbilo del Oficialismo

El mundo oficialista está feliz. Qué duda cabe. Sin embargo, se ha contenido, precisamente, para dar signos de normalidad, evitar la pinochetización de la agenda y aprovechar la contingencia en su favor, sobre todo si puede rendirle votos en octubre próximo.

Por PAMELA ARAVENA BOLIVAR

NI en sus mejores sueños imaginaron años atrás los líderes de la Concertación tener al ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Presidente de la República, Augusto Pinochet, procesado por violaciones a los derechos humanos. Ni menos que ello se lograría en un gobierno de signo socialista conducido por el único de sus enemigos que osó alzarle la voz y apuntarlo con el dedo: Ricardo Lagos.

Pero fue así. Por eso la alegría logró desbordarlos, a pesar de la autoimpuesta careta de tranquilidad, normalidad y prudencia que reinó en el mundo oficialista el pasado martes.

La estrategia ahora es bajarle el perfil a las posibles consecuencias negativas del desafuero, combatiendo la pinochetización de la agenda programática y apostando a que más temprano que tarde se restituirán las confianzas con las Fuerzas Armadas, se pasará la rabia de la oposición y se volverá a hablar del futuro en lugar del pasado.



HECTOR ARAVENA

El Presidente Lagos fue el encargado de manejar las comunicaciones durante las primeras horas del 8 de agosto. Su agenda estuvo marcada por la normalidad —aquí en la celebración del "Canto General"— y sus palabras destinadas a repetir que había que respetar los fallos de los tribunales.

La tesis de la normalidad

Siguiendo la tesis de Lagos —esbozada desde el mismo día en que ganó la presidencia— en el sentido de dejar que los tribunales actúen, el mundo oficialista pareció moverse el martes pasado en una avenida con un solo sentido: dar fuertes señales de normalidad.

La evidente similitud en las "tranquilas" actividades de los personeros concertacionistas —desde el Primer Mandatario hasta ministros y presidentes de partido— estuvieron destinadas a transformar el día hito del antejuicio a Pinochet en uno cualquiera, tal como se habría concordado en la reunión de la noche anterior, sostenida por dirigentes de la Concertación.

Desde el lunes a mediodía, el mundo del oficialismo sabía que el fallo se daría a conocer entre las 09:30 y las 10 hrs. del día siguiente. Fue así como —en una elocuente señal de que a pesar que los resultados del fallo dividieran a la opinión pública, Chile debía continuar su marcha— el martes se mantuvo en la agenda el Consejo de Ministros presidido por Lagos, el que sólo se interrumpió unos minutos para encender la televisión y enterarse en directo de la resolución de la Suprema.

La idea fue reaccionar con moderación, evitar manifestaciones demasiado provocativas, dar un signo de madurez democrática, según las propias palabras de La Moneda.

Fue por eso que esa mañana —a pesar de la trascendencia del fallo— únicamente se leyó un escueto comunicado cuyo borrador estaba preparado con antelación —ya que existía certeza del desafuero, no de la votación exacta, dicen— y visado por el Presidente, en el que como siempre se hizo hincapié en el respeto a los fallos del Poder Judicial y en la necesidad de que los tribunales apliquen las leyes sin presiones ni interferencias.

Batalla mediática

Para lograr el cometido de dar tranquilidad, hubo también una preocupación especial del Gobierno por enterarse con anticipación de cuáles serían las actividades de las Fuerzas Armadas, de producirse, como se esperaba, el desafuero.

El lunes por la tarde ya sabían en Palacio, por boca del ministro de Defensa, que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, visitaría a Pinochet el martes ganara o perdiera. Aunque no gustaba la idea, la noticia dio tiempo a los ministros políticos para preparar con anticipación una explicación sentimental, en el sentido de que era comprensible acompañar a un amigo cuando éste lo necesitaba y que no representaba ningún problema para el gobierno que así lo hicieran con Pinochet miembros de las FF.AA., incluido Izurieta.

La siguiente medida fue coordinar que en las primeras horas del martes nadie del gobierno, excepto Lagos, hablara, aunque hubo dos ministras técnicas que se salieron de libreto manifestando la alegría que les producía el desafuero.

En cambio, el Primer Mandatario —quien luego del Consejo asistió a la conmemoración de los 50 años del "Canto General", de Pablo Neruda, en la Universidad de Chile— aunque aseguró que el fallo demostraba "al mundo cómo hacemos las cosas en Chile, lo que debe ser motivo de orgullo", centró sus apreciaciones en insistir majaderamente en la necesidad de respetar los fallos.

Incluso fiel a sus intenciones de no perfilar aún más los roces que pusieran en duda la normalidad institucional, evitó confrontarse con Izurieta a raíz de sus declaraciones cuando fue a visitar a Pinochet, en el sentido de que no necesitaba autorización para hacer lo que estimaba conveniente en circunstancias como las que se estaban viviendo ese día.

Como se ve, el Gobierno reaccionó cauto, pero no estuvo dispuesto a que esta crisis de confianzas que le ha enrostrado el mundo militar se extendiera también a la alicaída economía. Por eso el Presidente y sus ministros José Miguel Insulza y Alvaro García atajaron al vuelo, y sucesivamente, las declaraciones del máximo dirigente empresarial Walter Riesco, quien había señalado que dada la importancia de Pinochet en la vida nacional "era imposible pensar que su desafuero no incidirá en el clima de confianza que Chile necesita para superar sus problemas recesivos y para generar empleos".

La idea, entonces, es convencer de que el éxito o fracaso gubernamental no está condicionado por fallos de los tribunales que afecten al general, que serán capaces de combatir la pinochetización de la agenda y que las amenazas de que el país se paralizará —legislativa, económica y políticamente— no es más que una batalla mediática de la oposición, sin contenido, provocada por la rabia del momento, que conforme pase el tiempo se diluirá.

Pinochet une

La gran victoria para los dirigentes de los partidos opositores fue que se confirmó el fallo 14 - 6, dado a conocer por el diario electrónico "El Mostrador" siete días antes de que lo oficializara la propia Corte Suprema. Ello les permitió argumentar que la contundencia del voto de mayoría echa por la borda las acusaciones de que se trata de un juicio político.

Y de esa línea nadie los sacará. Hace tiempo que no se veían coincidencias tan grandes entre Ricardo Núñez, Guido Girardi y Ricardo Hormazábal, los presidentes del PS, PPD y PDC respectivamente.

Pinochet le sirvió al mundo concertacionista —como hace tiempo no lo hacía— para revivir antiguos tiempos, con una afinidad reforzada por su común oposición a las expresiones de sus pares de la derecha.

Por ejemplo, hubo coincidencia en rechazar la acusación de la Alianza de que el Gobierno no cumplió su promesa de lograr que los exámenes médicos se hicieran antes de votar el desafuero, y en vez, presionó a través del ministro de Justicia a la Suprema para lograr un fallo más contundente a favor de quitarle la inmunidad parlamentaria a Pinochet.

Los tres dirigentes, sin excepción, defendieron a su gobierno, negando tal acuerdo previo, poniendo el énfasis en que —aunque pocos— aún quedan jueces nombrados en la época de Pinochet, y que de los nombrados en tiempos de la Concertación o surgieron de quinas propuestas por la Corte Suprema con mayoría aún de ministros designados durante el régimen militar o de resoluciones apoyadas por el Senado con los votos mayoritarios de la oposición.

En ese mismo orden aprovechó la Concertación de reponer una antigua denuncia: que al acusar que el fallo fue político y no jurídico, la derecha no está haciendo otra cosa que quebrantar la paz social y demostrar su desapego a las instituciones democráticas.

La coalición gobernante también respondió a la estrategia de la derecha de reposicionar el tema del contexto histórico previo a la toma del poder por parte de los militares. Dijeron no temer una revisión de la historia —aunque se dice que no concurrirán a las sesiones del Parlamento citadas para ese debate—, pero aseguraron que no había que confundir los errores del pasado (frase que ligan algunos al gobierno de Allende y otros lo amplían hasta Frei Montalva y Alessandri) con los horrores (que relacionan con el régimen militar). Ese será el eje que asumirán en el debate, de producirse. Incluso en la DC hay acuerdo en que una cosa es haber sido opositores al gobierno de Allende y otra muy distinta, avalar las violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, hasta Girardi hace una distinción: que no se está juzgando a Pinochet por haber hecho un golpe militar, sino por los crímenes cometidos durante su gobierno.

La ahora denostada figura de Pinochet le sirvió también al oficialismo para aprovechar las débiles pero posibles ventajillas electorales que le da el que la Alianza por Chile se haya unido en torno a la figura del general, sobre todo cuando quedó demostrado en las últimas presidenciales que lo que le rindió frutos a la oposición fue precisamente lo contrario. La reunión de sus adversarios con el general en su domicilio puede echar por la borda todo el empeño de Joaquín Lavín, dicen, de apartarse de Pinochet para captar el voto de centro.

De hecho esta semana el propio Lagos ha utilizado las reacciones de la derecha frente al fallo para captar votos para su coalición en las futuras municipales, al pedirle a los votantes que sepan distinguir el trigo de la paja. Y aprovechó de insistir —tal como se hizo en las presidenciales pasadas— en que votar por la derecha será hacerlo por el grupo que estuvo en contra del seguro de desempleo.

> *El país no se paralizará gracias al Gobierno. Todo lo contrario. La idea es convencer de que el éxito o fracaso gubernamental no está condicionado por fallos de los tribunales que afecten al general, que serán capaces de combatir la pinochetización de la agenda y que las amenazas de que el país se paralizará no es más que una batalla mediática de la oposición.*

Sin embargo, la cercanía de las municipales en octubre, pero sobre todo de las parlamentarias del próximo año, permiten suponer al oficialismo que prontamente ganará espacio la teoría entre los dirigentes de la derecha de que es mejor mantener las distancias con el general, lo que ayudará a bajar la tensión y el discurso confrontacional del que acusan a sus opositores en estos primeros días.

Por eso quizás algunos dirigentes socialistas, como su presidente Ricardo Núñez y su secretario general Camilo Escalona —sin miedo a la redundancia—hasta osaron arriesgarse a anunciar nuevamente el fin de la transición. El desafuero —creen— volvió a Chile al curso normal de su historia y terminará de cicatrizar las antiguas heridas del pasado.

Los temas conflictivos

Sin embargo, la "tranquila alegría" que rodeó al mundo oficialista está también cruzada por las tensiones que puede implicar el desafuero del ex Presidente.

La anunciada campaña medial del general, apareciendo en actos públicos él y su familia, hablando y defendiendo su obra, inevitablemente preocupó al mundo oficialista. Una ofensiva de ese tipo —sobre todo después de meses en que el general no se ha visto— puede conseguir "pinochetizar" la agenda y condicionar el éxito o fracaso del gobierno en su intento por imponer temas como la reactivación económica, el empleo y la seguridad ciudadana.

Y aunque también se ha tratado de bajarle el perfil, al gobierno no deja de preocuparle que la derecha imponga efectivamente un bloqueo legislativo rechazando toda iniciativa gubernamental en el Congreso. Si no, Lagos no hubiera lanzado una ofensiva en contra de tal amenaza.

Pero cercanos recuerdan que ahora —con los desafueros de Francisco Javier Errázuriz y de Pinochet— el oficialismo tiene mayoría simple tanto en la Cámara como en el Senado, lo que le da un poder de negociación que antes no poseía. Además, se niegan a creer que la Alianza esté dispuesta a asumir los costos que le significará ser acusada en épocas electorales de paralizar legislativamente al país.

La otra dificultad que enfrentará el oficialismo y que se estima más difícil de resolver es el de los acuerdos de la Mesa de Diálogo. De hacerse efectiva la interpretación de que después del desafuero los militares en retiro se desistirán definitivamente de colaborar —aunque Izurieta se comprometa a seguir investigando—, lo que hará fracasar estrepitosamente la Mesa, los dirigentes de la Concertación no sólo ya iniciaron la ofensiva de exculpar al Gobierno de alguna responsabilidad, sino que, además, afirman que sería una inmoralidad y un atentado a su honor que las Fuerzas Armadas no cumplan su palabra.

El efecto aglutinador que ha provocado el factor Pinochet en la Concertación, sin embargo, no la inmuniza de una futura división, paradojalmente también provocada por la figura del senador vitalicio.

Es que desde que el general fue detenido en Londres, en lo único que parecieron estar de acuerdo todos en la coalición es en que debía desaforársele. Sin embargo, los temas previos, como la defensa de la soberanía chilena ante los tribunales de Londres o su traslado a España, así como los futuros, como el destino próximo del general (que la historia termine con exámenes médicos o con un largo proceso y condena), aún exacerban y fraccionan a los aliados gubernamentales.

Es así como el gran desafío para la alianza de gobierno será precisamente mantener lo que hoy lograron sin grandes esfuerzos: la mesura y la confraternidad. Claro que el escenario futuro —con elecciones y decisión sobre el destino final de Pinochet— no le brinda las mismas oportunidades para conseguirlo.■

■ **Cuentan Que**

¡Mil 200 Millones de Pesos Fiscales en una Edificación Irregular!¡Viva el MOP!

Un hermoso edificio de seis pisos, terminado en marzo pasado, espera albergar en Punta Arenas a los distintos servicios del Ministerio de Agricultura en la XII Región.

Pero la espera tiene para largo. Aunque el edificio está terminado, no se ha podido inaugurar —oficial o extraoficialmente— ni mucho menos entrar en uso.

¿La causa? La obra no cuenta hasta la fecha con el permiso de edificación que exige la Ley de Urbanismo y Construcción.

La estructura —cuya construcción tardó un año— estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y tuvo un costo de mil 200 millones de pesos. Y al parecer, nadie se preocupó de cumplir con los trámites de rigor ante la Dirección de Obras Municipales que exige la ley.

Sin embargo, los problemas —y los gastos— no terminan ahí. El edificio además no cumple con el Plano Regulador de Punta Arenas, por lo que deberá ser parcialmente demolido para adecuarse a dicha norma.

Según la denuncia de los diputados Rodrigo Alvarez y Víctor Pérez, se trata de mil 200 millones de pesos botados a la basura por culpa de la negligencia de las autoridades públicas. Millones con los que calculan se pudieron haber contratado alrededor de 12 mil cesantes.



El edificio del Ministerio de Agricultura en Punta Arenas está terminado, pero vacío. Nadie se acordó de pedir el permiso de edificación respectivo, ni de cumplir con el Plan Regulador de la ciudad magallánica.

Aunque ya se han iniciado dos sumarios administrativos, hasta la fecha aún se está a la espera de la tramitación de los permisos municipales correspondientes.

Total paga Moya, los dineros fiscales no duelen a los que los gastan: Para ello se olvidan de la monserga que son de "todos los chilenos".■